

BOLETIN DE NOTICIAS

COMITÉ MONS. OSCAR ROMERO DE MADRID

Argumosa, 1-6º-B 28012-Madrid. Tfno.: 91.539.87.59 Email:cmromero@nodo50.org

El Comité Mons. Oscar Romero de Madrid no se responsabiliza necesariamente de las opiniones presentadas en este Boletín. Señalamos las fuentes de donde han sido extraídas. En caso de que no desee seguir recibiendo nuestro Boletín, por favor, comuníquenoslo por medio de un correo electrónico a la dirección más arriba señalada.

BOLETÍN NÚMERO 166

FECHA: 1 de Abril de 2013

SUMARIO		
PAÍS	CONTENIDO	PG.
BOLIVIA	Conflictos de baja intensidad: la apuesta para desestabilizar Bolivia	2
	Muerto Chávez, Evo Morales en la mira de los globalizadores	2
COLOMBIA	Por el reconocimiento de los derechos de los campesinos y la paz con justicia social	5
GUATEMALA	Indígenas denuncian racismo y discriminación de parte del sistema de justicia	11
	Campañas contra movimientos sociales	12
HONDURAS	De ganar las elecciones, el gobierno de Xiomara Castro volverá al Alba	14
LATINOAMÉRICA Y CARIBE	Cuba y Haití, los dos extremos de la desigualdad sanitaria latinoamericana	15
MÉXICO	Solalinde arranca al gobierno de México la promesa de proteger a los emigrantes	17
NICARAGUA	BM aprueba 40 millones dólares para nicaragua	18
	Crisis no merma las remesas	18
PUERTO RICO	Puerto Rico pide descontaminar zonas militares	19
VENEZUELA	Ecuestas dan a Maduro entre 16 y 22 puntos de ventaja para presidenciales	20
	Venden el canal de televisión que llevan años diciendo que cerraba Chávez	20

BOLIVIA

CONFLICTOS DE BAJA INTENSIDAD: LA APUESTA PARA DESESTABILIZAR BOLIVIA

Ante la falta de credibilidad y liderazgo, la derecha boliviana, con claras indicaciones del régimen de Estados Unidos, apuesta por los conflictos locales de baja intensidad para desgastar al gobierno del presidente Evo Morales, y crear una imagen de caos de cara a las elecciones de 2014 en esta nación andina.

Desde ya los maltrechos partidos opositores, y sus cabecillas sin protagonismo y respaldo alguno, ensayan la estrategia de corroer la unidad de los bolivianos en diferentes puntos de la geografía nacional, instigando y exacerbando añejadas diferencias territoriales y étnicas.

Washington y sus súbditos en este Estado sudamericano no tienen otra alternativa que apostar por promover el racismo y echarle leña a viejas divergencias entre los habitantes de las ciudades y del campo, heredadas del colonialismo español y de predecesores gobiernos neoliberales.

El propósito es tratar de erosionar al ejecutivo de Bolivia y especialmente a su mandatario, previo a los comicios del venidero año, en los cuales Morales se vislumbra como el eventual vencedor, ante la falta de un contrincante con posibilidades reales de enfrentarlo.

La administración norteamericana y sus tentáculos desestabilizadores, empeñados en interrumpir a toda costa el proceso revolucionario de cambios que se escenifica en este país latinoamericano y destronar a su líder, conocen muy bien lo descalabrada que está la derecha tradicional boliviana.

Saben de igual manera que no se vislumbra un candidato opositor que pueda rivalizar con Morales, pese a que han intentado construirlo sin conseguir hasta el momento su objetivo.

De otro lado, están al tanto de los triunfos logrados en los últimos tiempos por el presidente de Bolivia en diferentes escenarios, que han favorecido la unidad de este país, y le han proporcionado un notorio prestigio a nivel mundial.

Entre esas victorias, sobresale el haber colocado en la palestra pública internacional la reiterada demanda marítima de Bolivia a Chile por su salida al mar, lo cual ha tenido además un gran impacto en el panorama político nacional, y se ha convertido en un elemento más de respaldo a Morales.

También destacan el reconocimiento por la ONU del Acullico (masticado de coca), y la promoción por esa organización mundial de la Quinua, un ancestral cereal cultivado en estas tierras andinas de excepcionales propiedades nutritivas.

Nadie duda, ni siquiera Washington, que Morales se ha convertido en un líder latinoamericano, y de facto en un peligro para los intereses de dominación de la Casa Blanca en esta región, por sus rotundas posturas antiimperialista y a favor de la integración de la Patria Grande.

No han sido pocas las ocasiones que el mandatario boliviano ha denunciado a Estados Unidos por su irrespeto e injerencia en los asuntos de América Latina, por sus flagrantes violaciones de los derechos humanos, y por su política de imposición y opresión.

Más claro que el agua, Morales es hoy un escollo para la administración norteamericana, al que hay que tratar de deponer a cualquier precio.

Fuente: Patricio Montesinos. Rebelión

MUERTO CHÁVEZ, EVO MORALES EN LA MIRA DE LOS GLOBALIZADORES

La agenda de los "iluminados" globalizadores, cuyo verdadero fin es establecer un control absoluto sobre los recursos naturales del planeta, mediante la lucha preventiva contra los líderes que se atreven a desafiar este proceso defendiendo los intereses nacionales de su país, nunca tiene un reposo o intermedio.

Es permanente, irreversible, despiadada y utilizan todos los recursos disponibles que varían de los más rudimentarios a los extremadamente sofisticados. Durante más de 14 años han estado en

guerra encubierta contra el gobierno Bolivariano de Hugo Chávez, pero tampoco han cambiado sus intenciones después de su muerte anunciada.

Ahora le toca el turno al primer presidente aymara de Bolivia, Evo Morales quien se atrevió a declararse “antiimperialista” guiando a su pueblo a un Estado de Buen Vivir, haciendo cambios sustanciales bajo nuevos compromisos con la calidad de vida y la protección de la naturaleza.

En los últimos meses la guerra mediática contra Evo Morales y su gobierno se ha intensificado, tildándolo de comunista, dictador, chavista, fidelista, individualista, egocentrista, anticlerical, narcisista etc, etc. Sin embargo, hay un elemento nuevo que consiste en corromper, confundir y desviar a las bases tradicionales de apoyo a la gestión del presidente por medio de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs).

En realidad es un reciclaje de la premisa del concepto de la “democracia controlada” elaborada y explicada por el profesor norteamericano William A. Douglas ya en 1972 en su libro “Developing Democracy” (Desarrollando Democracia).

Para Douglas, el camino más seguro para mantener la hegemonía norteamericana en el Tercer Mundo y en este caso en América Latina, es crear agencias especializadas norteamericanas para tomar el control, evitando que sea visible, sobre las organizaciones de base para que sean instrumentos para la promoción e imposición de los intereses geopolíticos y geoeconómicos de Washington en cada país, considerado importante para la seguridad nacional de EE.UU.

La agitación indígena en torno a un proyecto de construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos que atravesaría el Territorio Indígena Parque Natural Isiboro- Secure (TIPNIS) es uno de los casos de la influencia de las ONGs en la organización de las nueve marchas contra el proyecto y en la preparación de la décima anunciada por el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Adolfo Chávez.

Las ONGs REDD (financiada por Suecia), el Fondo Verde (financiada por la Gran Bretaña, Noruega, Austria y México), y 20 otras, han participado activamente en todas estas marchas. Actualmente están envueltas en promoción de un proyecto, realmente absurdo, entre las 64 comunidades indígenas de yurakares, trinitarios, mojeños y chimanes, en total de unas 10.000 personas del TIPNIS para que el gobierno “reconozca nuestro derecho a recibir el pago por compensación por la mitigación de gases de efecto invernadero que cumplen nuestros territorios”.

Se sabe que el proyecto de esta carretera existe desde 1765 y que en 1826 durante el gobierno del mariscal José Antonio de Sucre se emitió una ley para unir los departamentos del Beni y Cochabamba vialmente y que es provechoso para la economía de ambas regiones como igual para el bienestar de los pobladores del TIPNIS.

También se sabe que la mayoría de los pueblos indígenas de la zona se pronunciaron en pro de la construcción de la carretera y que el gobierno se comprometió a entregar el martes 2 de abril el informe final de la consulta a los pueblos del TIPNIS.

La consulta llegó a 58 de las 69 comunidades, decidiendo 11 no participar en el proceso. En total 55 comunidades apoyaron la construcción de la carretera y tres se pronunciaron en contra. A pesar del voto de la mayoría las marchas de la minoría no cesan pues existen intereses de grandes corporaciones que utilizan frecuentemente las ONGs para lograr su acceso a los recursos naturales de Bolivia.

Oficialmente están operando en el país 399 ONGs y no se sabe cuántas más no registradas hay. Se sabe también que 22 de ellas están detrás de las marchas indígenas. Recientemente la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos advirtió que “detrás de la marcha de indígenas del Oriente existe un movimiento político fuerte para desestabilizar al gobierno”.

Parece que hay una consigna de los globalizadores en la necesidad de alterar la estabilidad socio económica de Bolivia para no permitir que Evo Morales gane las próximas elecciones presidenciales en abril de 2014. Desde diciembre del año pasado empezó una campaña orquestada por la oposición denunciando alto grado de corrupción del gobierno nacional.

Posteriormente se intensificó el proceso de la división dentro de las bases de apoyo a Evo Morales. Lo extraño de todo este proceso es la coincidencia de los intereses de la derecha y la izquierda en atacar al presidente utilizando pretextos elaborados por la oposición de la élite tradicional boliviana.

Los dos grupos no han escatimado esfuerzos para denunciar “evonarcisismo” y la “megalomanía” del presidente, utilizando el pretexto de que 16 estructuras públicas, entre aeropuertos, estadios, colegios y centros culturales y deportivos llevan el nombre de Morales. También tanto la izquierda como la derecha lo acusan de vanidad al recibir 20 títulos de doctorado honoris Causa que le otorgaron diferentes universidades extranjeras.

Lo que no toman en cuenta sus detractores es que haya sido la voluntad de los habitantes de estos lugares de poner el nombre del presidente a las obras, en agradecimiento por tratar de mejorar el nivel de su vida constantemente ignorado por las autoridades anteriores.

La oposición paralizó la vida económica de Oruro durante 40 días por el mero hecho de que el aeropuerto local que el presidente ha hecho rehabilitar para el funcionamiento normal haya sido cambiado de nombre de Juan Mendoza a Evo Morales por la Asamblea Legislativa Departamental.

Esta protesta fue tan hábilmente dirigida que nadie tomo en cuenta el daño que se ha hecho a la economía del departamento de Oruro y las pérdidas que han tenido que asumir sus pobladores. Y en este contexto los maestros trotskistas han sido unos de los más activos para desestabilizar al departamento como si no existieran otras formas de luchar contra lo que se determine como una arbitrariedad o injusticia histórica.

También sorpresivamente varios grupos de dirigentes mineros encabezados por el secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Oruro, una organización conocida históricamente como revolucionaria, se alió con la derecha racista en este paro. Se olvidaron los mineros de Huanuni que por primera vez en la historia sus sueldos, gracias a la gestión del gobierno actual de Bolivia, han subido hasta 30.000 bolivianos al mes.

Pero allí no termina la historia. Apenas se tranquilizó la situación en Oruro, los campesinos de la provincia Manco Kapac bloquearon la ruta Tiquina – Capacabana precisamente al inicio de la Semana Santa durante la cual miles de creyentes toman esta carretera para venerar a la Virgen de Copacabana. Los promotores de esta acción proponen un referendo para determinar la construcción de un puente sobre el estrecho de Tiquina rechazando el diálogo con el gobierno.

La Confederación Obrera Boliviana (COB) de orientación trotskista tampoco quedó atrás en esta lucha contra Evo Morales decidiendo constituir el Partido de los Trabajadores, nombre que recibe el Instrumento Político de los Trabajadores guiado por Guido Mitma.

El propósito de esta creación es oponerse a Evo Morales en las elecciones presidenciales en abril de 2014 y la consigna del nuevo partido es “¡Tiembra Evo, somos mineros”. Sin embargo, en la COB están afiliados 6,186 trabajadores mineros pertenecientes al sector estatal, mientras que 112,000 trabajadores de esta rama pertenecen al sector cooperativo de la minería y no tienen nada que ver con la COB.

La Iglesia Católica tampoco le tiene “simpatía” a Evo Morales. Igual como en Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Argentina, esta institución religiosa se ha opuesto a los programas sociales beneficiosos a los pobres. Durante el segundo intento del golpe de Estado en junio del año pasado (el primero tuvo lugar en abril de 2009) la Iglesia católica bendijo el motín de la policía. Según el presidente, “en Bolivia hay nuevos enemigos, ya no sólo la prensa de la derecha, sino grupos de la Iglesia Católica, los jerarcas de la Iglesia Católica que son enemigos de la transformación pacífica de Bolivia”.

Se espera que con el nuevo papa Francisco las relaciones entre Evo Morales y la iglesia no tengan chance de mejorar debido las tensiones que el gobierno actual siempre ha tenido con la Agencia de Noticias FIDES, un órgano de prensa con sello jesuita. En la percepción de Evo Morales, “Cuando el pueblo está arruinado por el Estado colonial, no aparece la Iglesia católica para salvarlo. Cuando el pueblo arrincona al Estado colonial, allí aparece el padre orando con los dirigentes, con los mediadores. Pero cuando el pueblo está derrotado por el Estado, no hay Iglesia”.

Tampoco Estados Unidos le perdona a Evo Morales la expulsión de su agencia USAID, la DEA (Drug Enforcement Agency) por espionaje e intentos de desestabilizar al país y también al embajador norteamericano Philip Goldberg por instigar las protestas violentas contra el gobierno de Bolivia. Todo esto explica porqué el Departamento de Estado ha estado dictaminando por cuatro años consecutivos en sus informes anuales que Bolivia “fracasó manifiestamente” en la lucha contra narcotráfico, esto a pesar de las estadísticas diferentes que en estos años han mostrado las autoridades del país.

Seguro si Evo Morales hubiera aceptado el retorno de la DEA los resultados de los informes habrían sido más positivos para Bolivia. Sin embargo, la historia guarda la estadística que muestra que durante el período 1985 -1990 con la presencia de la DEA las plantaciones de coca aumentaron de 35,000 hectáreas en el país a 75,000. Pero esto es harina de otro costal.

Mientras tanto a pesar de todas las dificultades, sabotajes, paros y marchas, Bolivia sigue su curso hacia un Estado de Buen Vivir. Recientemente en la celebración del 18 aniversario de la creación del partido Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales ratificó que continuará “combatiendo al capitalismo, imperialismo y al neoliberalismo”. También enfatizó que “ahora tenemos Patria, hemos recuperado la Patria para los bolivianos”. Y en esta Patria, según el vicepresidente del país Álvaro García Linera, “cada vez menos bolivianos, y a corto plazo ningún boliviano, se irá a dormir con hambre porque acá estamos distribuyendo la riqueza, lo que nos pertenece a todos para beneficiar a los más pobres, a los más humildes y a los más necesitados”.

Si el dramaturgo norteamericano Arthur Miller hubiera observado el proceso boliviano, iniciado por Evo Morales, habría pronunciado sin duda alguna su famosa frase: “hay ruedas moviendo ruedas en este pueblo y fuegos nutriendo fuegos”. ¡Ojalá que estos fuegos sean beneficiosos para su pueblo y que ningún viento del Norte pueda apagarlos!

Fuente: Vicky Peláez. Ria Novost

COLOMBIA

POR EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS CAMPESINOS Y LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL

PROPUESTA POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA PARA UNA REFORMA AGRARIA INTEGRAL

Las organizaciones campesinas de la ANZORC reunidas en el III Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina en San Vicente del Caguán, luego de un proceso de deliberaciones a nivel local, regional y nacional, desarrollado durante los últimos seis meses, presentamos a la sociedad colombiana y a las partes de la mesa de conversaciones de paz nuestras propuestas de política agraria que deben regir en el país para el logro del anhelo de la paz con justicia social basada en la reforma agraria integral, el reconocimiento de nuestros derechos campesinos, la protección ambiental, la economía justa, y un ordenamiento territorial coherente con la vocación de los territorios.

SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LAS CAMPESINAS Y LOS CAMPESINOS

El Estado debe desarrollar una política de inclusión y reconocimiento que contemple la activa participación del campesinado en la toma de decisiones sobre los destinos del campo, y sobre la relación campo-ciudad. Tal participación se debe hacer efectiva en la nueva institucionalidad que ha de crearse para aplicar esta política, mediante la elección de representantes campesinos en sus instancias directivas.

Se reconoce la territorialidad campesina, como una serie de formas en que el campesinado ha orientado el uso y la organización de los territorios, aprovechando y protegiendo recursos naturales estratégicos, organizando la vida social, cultural, política y económica. Como consecuencia: Se respeta la identidad y modos de vida campesinos, las normas comunitarias, las estructuras organizativas propias, las formas de resolución de conflictos, los saberes y prácticas educativas, la economía campesina, es decir, su condición de sujeto político, social, cultural y económico.

Se reconoce el derecho de las comunidades campesinas a ser consultados y otorgar el consentimiento previo, libre e informado como requisito para las intervenciones que afecten el territorio en lo social, cultural y ambiental, particularmente en los casos de implementación de megaproyectos.

Se crea una institución oficial responsable de garantizar la participación del campesinado en la construcción del conocimiento, la ciencia y la tecnología para la producción agraria y la conservación. Esta institución prestará la asistencia técnica para la producción, transformación, comercialización, y economía solidaria, a las comunidades campesinas.

Se respetan las formas de autonomía territorial que el campesinado ha establecido ante el abandono estatal, y la concertación es el mecanismo idóneo para definir los términos del desarrollo.

Reconocer y dar aplicación a la Declaración Internacional de los Derechos Campesinos propuesta por La Vía Campesina y avalada por la ONU, tomando las medidas estructurales y legislativas que los hagan aplicables. Además del Estado, los medios masivos de comunicación, la academia y el sector agroindustrial deben contribuir en su efectivo reconocimiento.

Reconocimiento con enfoque diferencial que promueva el acceso equitativo de jóvenes mujeres, niños, adultos mayores con orientación sexual no hetero-normativizada, para el campesinado afrodescendiente, para los campesinos en estado de invalidez, así como para los y las campesinas mayores.

Sobre el modelo de desarrollo rural

Un modelo de desarrollo rural que ponga en el centro el respeto por la vida humana y la naturaleza, regulará el extractivismo y la devastación de los recursos naturales y que garantizara la integralidad de los derechos para toda la población y todo el territorio nacional. Este modelo valoriza la economía campesina, la articula con equidad a la industria, el comercio y los servicios, y se orienta hacia la soberanía alimentaria. Este modelo implica que la economía campesina sea subsidiada, es decir, que el gobierno nacional garantice subsidios para acceder a parcelas y así mismo subsidiar la producción, lo que exigiría la existencia de seguros para la producción alimentaria.

Se crearan garantías para que el campesinado también pueda hacer agroindustria, lo que implica que la tecnificación de la producción debe ser una de las formas en las que se garantice espacios adecuados para la producción sostenible.

La participación en los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales, estará basada en formas asociativas como las cooperativas, alianzas equilibradas con los empresarios, favoreciendo la articulación entre el campo y la ciudad y buscando que la producción, comercialización y consumo, este basado en principios solidarios.

Este modelo implica la implementación de una verdadera reforma agraria, y el reconocimiento de los territorios campesinos, indígenas y afrocolombianos como claves de un desarrollo sustentable.

Por su coherencia con la dignificación de los campesinos, la protección ambiental y la soberanía alimentaria, la disminución de costos y la mayor utilización de trabajo campesino, la agroecología será una política nacional, de gradual y concertada implementación, amparada por subsidios y promoviendo economías solidarias. Para ello se deben fortalecer y replicar las experiencias existentes en alianza con los centros de investigación, instituciones estatales y organizaciones campesinas.

Se regulará la implementación de monocultivos, protegiendo las semillas nativas del acaparamiento y el maltrato genético, diversificando los cultivos y las formas de producir y distribuir, dando cabida al trueque entre familias y comunidades.

Se implementaran centros educativos acordes a las necesidades propias de las comunidades campesinas. Estos centros educativos deben garantizar la educación de los jóvenes campesinos, lo

que corroboraría a fortalecer la identidad y garantizar la permanencia en el territorio de los jóvenes en el campo.

Este modelo de desarrollo que proponemos se integrara a un mundo globalizado desde la cooperación y la justicia, por ello saludamos los tratados de comercio basados en el respeto de la soberanía y en la equidad de los intercambios, proponemos límites a la inversión extranjera y a la acción de las transnacionales, particularmente en lo que hace a los efectos ambientales, los derechos de los trabajadores y la propiedad de la tierra.

Sobre la economía campesina. Con qué insumos contamos

En la actualidad las economías campesinas controlan tan solo el 14% de la tierra, accedemos al 5% del crédito, nos han adjudicado tan solo el 10% de los apoyos productivos del Estado, y el 60% de nosotros nos encontramos dentro de los pobres monetarios del país (es decir que no alcanzamos a ganar \$106 mil pesos mensuales).

Nuestro aporte a la economía nacional

Con esos pocos insumos, producimos el 80% de los alimentos del país, generamos el 53% del empleo en el campo, aportamos el 40% al PIB agropecuario, y de paso aportamos el soporte ambiental para la industria urbana.

Recientes estudios indican que somos hasta 40 veces más productivos que los latifundios ociosos, que hoy ocupan más del 30% de la superficie del país.

Propuestas

Basados en el aporte expuesto anteriormente, consideramos que el Estado debería diseñar una política económica nacional para las economías campesinas, y no una asistencial como lo ha venido haciendo.

Tal política debería abarcar mínimamente las siguientes líneas de acción:

- . Acceso a los medios de producción (tierra, capital, información)
- . Investigación e innovación tecnológica en procesos de economía campesina
- . Acceso a mercados y competitividad
- . Diversificación productiva

Algunas acciones concretas a implementar en estas líneas de acción, podrían ser:

1. Inventario de los baldíos de la Nación y titulación a sus poseedores, de manera que se regularice buena parte de la propiedad campesina.
2. Entrega de tierras expropiadas, vía Zonas de Reserva Campesina y no mercado de tierras, pues esto último lo único que haría sería devolver al terrateniente a precios baratos, lo que vendió a precios caros al narcotraficante.
3. Realinderamiento de los Parques Naturales Nacionales, regularizando la tenencia de la tierra de sus pobladores y concertando con ellos un plan productivo ambientalmente sostenible.
4. Desgravar la propiedad campesina, es decir predios de menos de 2 UAF no pagan impuesto predial
5. Retorno del IVA de insumos de economías campesinas
6. Estímulos tributarios a empresas privadas y estatales (cárceles, hospitales, colegios, etc), que compren mínimamente el 25% de sus alimentos a economías campesinas.
7. Aumento de subsidios a los servicios públicos de estratos 1 y 2 urbanos, de manera que aumenten su poder de consumo de alimentos.
8. Implementación de Salvaguardias arancelarias y contingencias a las importaciones de productos de las economías campesinas.
9. Política cambiaria que impida la revaluación del peso colombiano, por cuanto favorece importaciones de alimentos al país.
10. Excención de impuestos a micro empresas de comercialización y transformación de productos de economías campesinas.

11. Implementar las metodologías de investigación productiva en finca, para generar desarrollo tecnológico ajustado a las necesidades locales.
12. Pagos por incentivos a la conservación de recursos naturales, tales como:
 - a. Tasa retributiva del agua
 - b. Exigir transferencia por generación hidroeléctrica (donde haya hidroeléctricas)
 - c. Reducción del impuesto predial por conservación de bosque en finca
 - d. Exigir la operación del Certificado de incentivo forestal a la conservación
13. Fomento de Agencias locales / municipales de emprendimientos rurales no agropecuarios.
14. Administración de las organizaciones campesinas de los Parques Naturales Nacionales, en interacción con PNN

OTRAS ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN

1. Fondo Nacional de Regalías, en tres de sus rubros:
 - a. Ciencia y tecnología, que equivale al 10% de las regalías
 - b. Fondo de compensación regional que equivale al 24% de las regalías
 - c. Fondo de desarrollo regional que equivale al 16% de las regalías
2. Formulación de un documento CONPES de economía campesina.
3. Cooperación internacional

Sobre la explotación de los recursos minero- energéticos

La explotación de la riqueza minera y de hidrocarburos deber hacerse en forma gradual, delimitada, diferenciada y revertida al desarrollo local y nacional.

La explotación minera y de hidrocarburos garantizará la permanencia en el territorio de las comunidades agrarias, y la soberanía nacional energética, puesta al servicio de toda la sociedad, e incluso de países vecinos. La explotación minera se desarrollará con límites muy claros y de riguroso cumplimiento. Límites en la escala, en el tiempo, en los métodos, en los lugares, en los sujetos que la ejecutan, en los beneficiarios.

La soberanía energética inicia con la construcción de una visión estratégica del aprovechamiento minero, bajo la conciencia de que no se trata de recursos infinitos, y que muchas generaciones vendrán luego de la nuestra. El Estado garantizará la generación del conocimiento y la tecnología necesarios, para que, en el mediano plazo, la explotación de estos recursos sea ejecutada por el Estado. El conocimiento y la tecnologías propias, garantizan un mejor desarrollo de la minería para que responda a las necesidades de abastecimiento, y a la de protección ambiental.

Se definirá en cada caso si es viable o no, la explotación de los recursos mineros, según las características propias de cada contexto, para ello el estudio juicioso de los efectos ambientales y sociales, así como el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades debe cumplirse. De ser aprobada la explotación, se debe establecer el tope máximo de explotación, los métodos, los mecanismos de mitigación de efectos, y la participación nacional, y local de los beneficios en el marco de planes concertados de desarrollo sustentable.

Las licencias ambientales serán mas exigentes y responderán mas ampliamente a los efectos locales y regionales de la exploración y explotación. La legislación debe ser modificada para proveer seguridad para el ejercicio de la pequeña minería, y la minería artesanal de la que viven comunidades agrarias enteras.

Se articulará la política minera con la política de desarrollo de agrario de una manera integral, evitando dependencia de esta actividad y promoviendo el fortalecimiento de otros sectores productivos. Las minas deben planificarse conjuntamente en una economía regional, buscando complementarse con actividades agropecuarias, de conservación ecológica, o de suministro de insumos para la mina, y dando valor agregado en el mismo territorio. La minería garantizará que los territorios se beneficien con infraestructuras adecuadas y de largo plazo, aprovechables aún al final de la actividad de explotación como distritos de riego.

La autorización de los proyectos mineros especialmente los de gran magnitud, se tiene que definir sobre la base de Planes de Desarrollo Integrales, donde el componente agro-minero debe tener una coordinación unificada y con autoridad, que integre las responsabilidades del Estado, las empresas y la comunidad, que definan el uso y protección del agua, la reforestación, las zonas de compensación ecológica; la infraestructura agrícola como los distritos de riego, las vías y estrategias para proteger y potenciar los mercados agropecuarios en sinergia con la actividad minera y garantizar la sostenibilidad de los territorios.

La inversión de los recursos pagados como regalías deben invertirse en la región con los mismos criterios de sostenibilidad y de manera armónica con el desarrollo rural agropecuario.

Se debe crear una institucionalidad orientada a lograr que la minería se convierta en beneficio y desarrollo social sostenible y justo, esta institucionalidad debe integrar a las comunidades locales garantizando el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades, como condición para la implementación de planes de explotación minera.

Sobre el ordenamiento territorial y ambiental

Desde el reconocimiento de la territorialidad, el ordenamiento social y ambiental del país debe garantizar el equilibrio entre aprovechamiento y conservación de los recursos y los ecosistemas.

El uso de los suelos debe ser coherente con su vocación, revirtiendo el proceso de ganaderización con un aumento de la superficie destinada a la agricultura campesina organizada en pequeña y mediana propiedad, convirtiendo la ganadería en una actividad sostenible y amigable con el medio ambiente.

Economía campesina, y diversificación de cultivos (pluricultivo) con recuperación de semillas y prácticas limpias desde los saberes ancestrales, culturales y campesinos. Se debe reconocer la existencia de regiones u otros sistemas de ordenamiento del territorio que se desarrollen desde los niveles social, económico, político y cultural.

Las figuras de protección ambiental del territorio deben contemplar los conocimientos tradicionales y las relaciones de las comunidades con la naturaleza, permitiéndoles habitar en ellas bajo normas claras, y estricto cumplimiento de responsabilidades y límites, en los casos en que su permanencia ha sido histórica o promoviendo alternativas concertadas con las comunidades.

Los Parques Naturales con Gente, son escenarios de acuerdo en términos de conservación, protección de los recursos y reconocimiento al papel del campesinado.

Zonas de Reserva Campesina Interculturales e Interétnicas, concebidas en el marco del respeto de las identidades culturales y la armónica convivencia.

A través de las ZRC la ocupación será equilibrada y sostenible con estímulos y desestímulos al poblamiento distribuidos en el territorio nacional cerrando la frontera agraria, garantizando las condiciones generadas por la reforma agraria integral.

En términos ambientales los planes de manejo ambiental incluyen la participación activa de las comunidades campesinas, es decir, son herramientas formuladas, ejecutadas y con seguimiento por parte de las organizaciones campesinas. Igualmente contienen mecanismos campesinos de control, ya establecidos en las comunidades como la racionalización de la explotación de recursos maderables, protección de especies en vía de extinción, delimitación de Cuencas hidrográficas entre otros que incluyan un enfoque relacional de género y generacional.

Cada proceso local de desarrollo requiere que la vereda sea considerada como la unidad mínima del territorio para la planificación ambiental y territorial siempre y cuando este articulada a escala municipal, departamental y regional. En cuanto a la distribución de la tierra se realizara mediante la

figura de las Unidades Campesinas Ambientales (UACA), esta unidad consiste en una figura a partir de la cual lo ambiental es primordial en la tenencia de la tierra.

Se plantea mecanismos de sustitución gradual y concertada de todos los cultivos de uso ilícito en las Zonas de Reserva Campesina y los territorios campesinos, iniciando por los proyectos piloto contenidos en los Planes de Desarrollo Sostenible de las ZRC.

Los mecanismos de coordinación interinstitucional de la administración pública tanto en el diseño como en la implementación de las estrategias, sin descartar la articulación con otras fuentes de financiación, en términos de ordenamiento territorial y ambiental requieren de una articulación efectiva con el Sistema Nacional Ambiental.

Por último, el ordenamiento territorial ambiental y productivo requiere avanzar en la identificación de las potencialidades productivas y ecológicas de los territorios, que planee dentro de ellos una zonificación ambiental que defina las zonas productivas de cada vereda contemplando tanto las particularidades ecológicas del territorio, las condiciones de acceso a los mercados y a los insumos técnicos.

Las ZRC, integradas en un sistema, como inicio de un proceso de reforma agraria que solucione los problemas asociados con la exacerbada concentración de la tierra, el minifundio y el microfundio, serán un componente fundamental del reordenamiento territorial y ambiental del país, junto a los resguardos indígenas y los territorios colectivos de comunidades negras. Las ZRC serán parte del reconocimiento constitucionalizado del derecho a la tierra y el territorio para el campesinado. Este reconocimiento incluirá el papel de defensa y protección del medio ambiente que realiza el campesinado.

El Sistema Nacional de ZRC - SNZRC

Se conformará de un Sistema Nacional de Zonas de Reserva Campesina que promueva la articulación de los actores involucrados, responsables, e interesados en el objetivo de propiciar que las zonas de reserva campesina se fortalezcan como instrumento de Reforma Agraria y de superación del problema agrario colombiano, dando lugar al despliegue de las capacidades y fines de cada uno de ellos, y, evitando la contradicción, duplicación, dispersión, y los vacíos en la política agraria que actualmente se presentan en las acciones del Estado en los niveles nacional, regional y local.

El objetivo del sistema es contribuir a la satisfacción de la integralidad de los derechos de las campesinas y los campesinos, la soberanía alimentaria del país, a la activación de las economías locales y regionales, la protección ambiental de territorios rurales colombianos, a través del pleno desarrollo de las zonas de reserva campesina de acuerdo a sus fines consagrados en la ley.

El Sistema Nacional de Zonas de Reserva Campesina estará integrado por las organizaciones campesinas que impulsan zonas de Reserva Campesina, sus formas de participación y planificación, la institucionalidad, la cooperación internacional, la academia y la empresa privada y de economía solidaria.

El Sistema tendrá una Coordinación conformada por Anzorc y la autoridad de desarrollo rural, encargada de velar porque se dinamicen las relaciones entre los integrantes del mismo, en las oportunidades, temáticas y durante los tiempos pertinentes, convocando, haciendo seguimiento y proponiendo medidas de mejora pertinentes.

El SNZRC estará contenido dentro del Plan Nacional de desarrollo con un articulado que lo contemple.

Se creará una nueva institucionalidad para el desarrollo rural, la redistribución equitativa de la tierra, la asistencia técnica y el desarrollo técnico y científico para el agro, y la distribución de alimentos. Como parte de esta nueva institucionalidad se debe iniciar por:

1. Garantizar el acceso a 10 millones de hectáreas, en una primera fase, para la constitución y el impulso de nuevas ZRC como parte de un Fondo de Tierras.
2. Avanzar en la constitución de las ZRC como figuras territoriales con un nivel de autonomía que garantice el ejercicio de la territorialidad campesina frente a los intereses empresariales de petroleras, multinacionales minero energéticas y el agronegocio.
3. Crear un Fondo Nacional de financiación de territorios campesinos y de las ZRC que garantice la ejecución de los Planes de Desarrollo Sostenible y el Programa Nacional de ZRC.
4. Complementar estas iniciativas con la realización de un catastro especial para ZRC y con la nueva institucionalidad campesina que se requiere para hacer viables las ZRC y los territorios campesinos.
5. Sacar de las deliberaciones sobre ZRC y Desarrollo Agrario integral con enfoque territorial al Ministerio de Defensa.

Sobre el Programa Nacional de Zonas de Reserva Campesina - PNZRC

El PNZRC estará contenido dentro del Plan Nacional de Desarrollo con un articulado que explicita su papel y sus alcances.

El PNZRC incluirá todos los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) de la ZRC, así como todas las iniciativas y proyectos de las ZRC que están en proceso de constitución.

El PNZRC financiará el funcionamiento del Sistema NZRC.

El PNZRC será financiado bajo las siguientes modalidades:

Un porcentaje anual fijo del presupuesto nacional

Un sistema especial de transferencias

Un sistema especial descentralizado de regalías

Otras rutas de financiamiento que se concerten dentro del SNZRC

Los ministerios de Hacienda, Agricultura, Salud, Transporte, Educación, Comunicaciones, Interior, Cultura, Ambiente y Vivienda deben incluir recursos para el financiamiento de los Planes de Desarrollo Sostenible de las ZRC.

El PNZRC y SNZRC contarán con los documentos Conpes necesarios concertados con Planeación Nacional.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ZONAS DE RESERVA CAMPESINA - ANZORC

Agencia Prensa Rural

GUATEMALA

INDÍGENAS DENUNCIAN RACISMO Y DISCRIMINACIÓN DE PARTE DEL SISTEMA DE JUSTICIA

Más de una docena de pueblos indígenas del país articulados en el Consejo de Pueblos de Occidente (CPO), repudiaron el proceder de la justicia que los discrimina y desprecia sus vidas, indicaron en una reciente declaración.

Entre los diversos casos denuncian que la Corte de Constitucionalidad negó el derecho a la consulta previa establecido en el Convenio sobre Pueblos Indígenas N° 169 de la Organización Internacional de Trabajo en respuesta a una Acción de Inconstitucionalidad de la ley de minería.

También mencionan que si bien la Corte de Constitucionalidad otorgó amparo a favor del Pueblo Q'eq'chi', en Lanquin Alta Verapaz, no anuló la licencia de la construcción de la hidroeléctrica "burlándose y cometiendo racismo y discriminación contra el Pueblo Maya Q'eq'chi".

Otro caso denunciado es que el gobierno y los tribunales se niegan a juzgar a los autores intelectuales de la masacre del 4 de octubre de 2012 en Totonicapán, promoviendo así "la impunidad y el debilitamiento del Estado de Derecho".

Por otro lado, los fallos de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad son a favor de empresas multinacionales como en el caso del Pueblo Maya Ixil donde la empresa italiana ENEL,

en complicidad con el Gobierno actual firmaron un convenio de negocio que viola la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas.

A continuación compartimos el documento en el que enumeran los casos en que afirman han sido víctimas de racismo y discriminación.

Declaración de los Pueblos de Guatemala (1)

Los Pueblos Ixil, Q'anjob'al, Chuj, Akateko, K'iche', Mam, Kaqchikel, Q'eqchi', Ch'orti', Poqomchi', Achi', Xinka y Meztizo, constituidos en Consejo, queremos expresar nuestra gran indignación porque volvemos a comprobar que la justicia en esta nación desprecia nuestras vidas. A continuación ejemplos contundentes:

1. La Corte de Constitucionalidad en respuesta a nuestra Acción de Inconstitucionalidad de la ley de minería negó nuestro derecho de consulta regulado en el Convenio 169 de la OIT, antes de la aprobación de la ley de minería.

2. En Lanquin Alta Verapaz, la Corte de Constitucionalidad otorgó amparo a favor del Pueblo Q'eq'chi', pero no anuló la licencia de la construcción de la hidroeléctrica, burlándose y cometiendo racismo y discriminación contra el Pueblo Maya Q'eq'chi'.

3. En Totonicapán, el gobierno y los tribunales al no juzgar a los autores intelectuales de la masacre del 4 de octubre del 2012, sigue promoviendo la impunidad y el debilitamiento del Estado de Derecho.

4. En el territorio Maya Ixil, los fallos de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad han sido a favor de empresas multinacionales. El Pueblo Ixil probó el dialogo con la empresa ENEL de Italia sin embargo, ésta empresa en complicidad con el Gobierno actual abandonaron el dialogo, se aprovechan de la pobreza de la población y han firmado un convenio de negocio que viola la dignidad y los derechos de los Pueblos Indígenas.

5. Con la reforma a la carrera magisterial que está imponiendo el actual gobierno se está negando y destruyendo los idiomas indígenas y la formación de maestros indígenas.

Y así podríamos enumerar infinidad de acciones legales que hemos interpuesto para terminar con tantos abusos, asesinatos, persecuciones, desalojos que están ocurriendo en los cuatro puntos cardinales de nuestro país.

Hemos utilizado todas las herramientas legales para la defensa de nuestros derechos como una muestra de confianza hacia el Estado de Derecho que nos han impuesto. Nos están obligando a no creer ni respetar sus leyes y sus instituciones.

Frente a estas agresiones hacemos un llamado a todos los pueblos a la unidad y a la resistencia

Iximulew, 9 Aq'ab'al, 10 K'AT /Guatemala, 14 y 15 de Marzo de 2013

Consejo de Pueblos de Occidente (CPO)

Nota:

(1) Articulación entre autoridades e instituciones propias del Pueblo Maya: Consejo Mam (San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango y Retalhuleu), Consejo K'iche' del Quiché, Consejo K'iche' de Quetzaltenango, Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, Consejo de autoridades comunitarias de Momostenango, Asociación indígena de San Francisco el Alto, Asamblea de los Pueblos de Huehuetenango, Consejo de Autoridades Ancestrales Mayas de la Región Ixil, Comunidades Kaqchikeles de Chimaltenango, Consejo de los Pueblos de Tezulutlán, Consejo Ch'orti', Parlamento Xinka y Movimiento Regional de Resistencia Popular del Sur.

Fuente: Servindi

CAMPAÑAS CONTRA MOVIMIENTOS SOCIALES

La criminalización de los movimientos sociales en Guatemala se torna cada vez más evidente. Los últimos 18 meses se han caracterizado por campañas de difamación en los medios de comunicación, amenazas contra dirigentes y aumento de la militarización.

Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), es una de las personas que ha sufrido ataques verbales y físicos de los opositores. “Las amenazas vienen de varias direcciones”, explica Pascual. “En primer lugar, hay alrededor de once columnistas de prensa que nos acusan de terroristas. Ellos hablan diariamente mal de los movimientos sociales en general y de CUC en particular. La criminalización de los movimientos sociales es generalizada, pero también hay una campaña dirigida específicamente contra CUC y mi persona. Luego están los grupos de “anti-terroristas”, movimientos que creen y dicen que somos criminales y comunistas. Las organizaciones internacionales también están siendo atacadas por ellos”, dice.

Campañas contra la Iniciativa 4084

Una de las recientes campañas contra los movimientos sociales en el país está dirigida por el grupo Chapines Unidos Por Guate. En un folleto de varias páginas que se publicó en su página web, este grupo de interés explica las razones por las cuales se oponen a la aprobación de la ley de Desarrollo Rural Integral también conocida como iniciativa legal 4048. La ley de Desarrollo Rural Integral ha sido discutida por 10 años en el Congreso de Guatemala. Según los movimientos indígenas y campesinos la ley promueve el acceso a la tierra, la soberanía alimentaria y la reducción de la desigualdad y la pobreza. Los Chapines Unidos Por Guate dicen que la ley es inconstitucional y consideran que detrás de esta propuesta de ley están los movimientos indígenas y campesinos y hacen mención en particular al CUC, caracterizándolo como un actor agresivo que usa protestas y bloqueos como formas de ataque.

En el mismo folleto se menciona también a otras organizaciones como la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC), a quien se acusa de usar tonos amenazantes en textos dirigidos a aquellos que no votan a favor de la propuesta. En el folleto también se identifica a organizaciones internacionales y financieras que apoyan al CUC y CONIC, como por ejemplo ActionAid, Oxfam y el Centro Cooperativo Sueco.

Criminalización para socavar la credibilidad

A finales de enero de 2013 Daniel Pascual fue amenazado por desconocidos con un machete cuando estaba en San Juan Sacatepéquez solidarizándose con la población en resistencia en contra de la empresa Cemento Progreso. Oscar Fernando Bracamonte, el alcalde del municipio, acusó después al CUC y a Daniel Pascual de fomentar la violencia y dividir al pueblo sanjuanero: “Quiero denunciar que Daniel Pascual y dirigentes del CUC están sembrando el pánico, el divisionismo, la violencia y confrontación en las comunidades de mi pueblo”, en declaraciones recogidas por el diario Prensa Libre. El alcalde también publicó una serie de campos pagados en varios periódicos sobre el incidente. Según explica Daniel Pascual “quieren convertir nuestra lucha social y nuestras demandas por los derechos humanos en terrorismo”.

El año pasado hubo fuertes protestas en contra la hidroeléctrica en Santa Cruz Barillas. Como consecuencia el presidente y ex-militar Otto Pérez Molina declaró el estado de sitio. Con anterioridad se produjeron violentos enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas militares que resultaron en la muerte de un líder comunitario. Según BBC Mundo, Pérez afirmó luego de los hechos que los manifestantes pertenecían a los carteles de la droga. La criminalización en general es una estrategia que involucra varios opositores porque sirve para socavar la credibilidad de los movimientos sociales. Pérez también ha realizado instalación de brigadas militares, algo que ha sido criticado por varias organizaciones sociales en el país. Especialmente después los sucesos del 4 de octubre del año pasado en Totonicapán, cuando ocho campesinos resultaron muertos después de haber participado en una manifestación que terminó con un fuerte enfrentamiento con tropas militares.

Amenazas contra líderes

Daniel Pascual no es el único que ha sufrido amenazas a causa de su lucha por el derecho a la tierra. En junio del año pasado Yolanda Veliz Oquell, lideresa y opositora a la minería, recibió varias amenazas por teléfono. Después desconocidos le dispararon. Afortunadamente sobrevivió. Domingo Hernández Ixcoy, uno de los líderes de Waqib Kej, también fue amenazado de muerte en 2012. Gerónimo Sol Ajcot, miembro de la junta directiva de la Asociación Maya Tzutujil de Agricultores de Santiago Atitlán, integrado en la CONIC, fue asesinado a balazos por desconocidos

el pasado 11 de marzo de 2013. Lamentablemente, hay muchos más casos parecidos, y lo que todos los líderes amenazados o asesinados tienen en común es que han criticado abiertamente al gobierno, a empresas mineras u otras grandes inversiones.

Fuente: Lina Karlsson. SAL / Alba Sud

HONDURAS

DE GANAR LAS ELECCIONES, EL GOBIERNO DE XIOMARA CASTRO VOLVERÁ AL ALBA

El partido Libertad y Refundación Libre, brazo político del Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, que en 2009 encabezó la lucha contra el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya, atacó hoy (21/3), con vehemencia, la política económica del actual gobierno de Porfirio Lobo.

"La situación económica del país es grave y sin precedente en la historia. Nunca hemos estado con un deterioro de tal magnitud de las finanzas públicas, del aumento de la pobreza y de la falta de producción y empleo en Honduras", dijo el ex presidente Zelaya durante una rueda de prensa.

En un documento de posicionamiento ante esta situación, el partido Libre y su candidata presidencial Xiomara Castro, señalaron el fracaso del gobierno en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, FMI, a causa del enorme déficit fiscal acumulado, así como la reciente degradación de la calificación de riesgo país de "estable" a "negativa", de parte de Moody's y Standard & Poor's.

Según el documento, esta situación obligó al gobierno de Honduras a contratar deuda pública onerosa mediante la colocación de bonos soberanos por diez mil millones de lempiras (500 millones de dólares).

En declaraciones a medios nacionales, Nelson García, presidente del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, FOSDEH, dijo que el país se encuentra en un estado de "calamidad económica", con un endeudamiento "que ha llegado a cifras insostenibles" y un déficit fiscal "de los más altos en la historia del país".

De acuerdo con datos del Colegio Hondureño de Economistas, en 2012 el déficit alcanzó los 1.2 mil millones de dólares, con una proyección de parte del gobierno para el 2013 de un 3.5% del PIB (Producto Interno Bruto). Sin embargo, las firmas calificadoras aseguran que podría alcanzar hasta el 6% (era el 2.4% en 2008 antes del golpe).

Por otro lado, la deuda pública de Honduras pasó del 21.7% del PIB en 2008, al 35.4% el año pasado, con una deuda interna de 2.7 mil millones de dólares y una proyección para el 2013 de 3.4 mil millones. Sumando la deuda interna con la externa, Honduras inicia este nuevo año con una deuda total de unos 8 mil millones de dólares, a los cuales hay que agregar los 500 millones en concepto de bonos soberanos emitidos la semana pasada.

Durante la conferencia de prensa, el coordinador de Libre, Manuel Zelaya y el jefe de campaña, Enrique Reina, atacaron los diez paquetes de nuevos impuestos impulsados por el gobierno del Partido Nacional y el candidato presidencial Juan Orlando Hernández, actual presidente del Congreso. Además, calificaron de absurda la decisión del Congreso de aprobar Notas de crédito con cargo a los impuestos futuros, para la compra de cemento por 50 millones de dólares, o la de destinar la misma cantidad para construir una nueva cárcel.

"La gente no come cemento, sino frijoles y maíz, y exige que se le resuelvan los problemas de hambre, pobreza y falta de trabajo", sentenció Zelaya, quien estuvo acompañado por los principales dirigentes del partido.

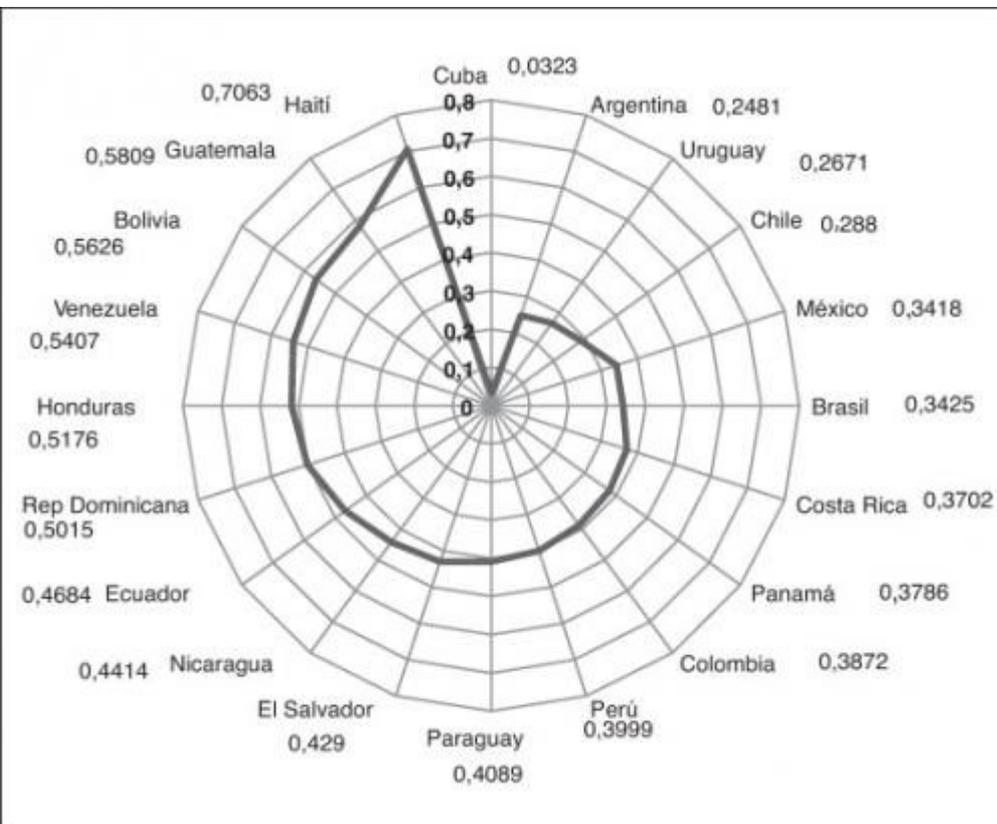
Finalizando la conferencia de prensa, el ex presidente aseguró a la LINyM que, de ganar las elecciones, el gobierno de Xiomara Castro reanudará de inmediato los intercambios y las relaciones con la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA).

"La posición de la candidata Xiomara Castro ha sido clara: Honduras necesita apertura internacional. Vamos a volver a Brasil, a Venezuela, especialmente con proyectos de solidaridad latinoamericana como es el ALBA, la CELAC, Petrocaribe y las demás instancia de integración latinoamericana y

caribeña. Vamos a recuperar lo que perdimos desde el golpe de Estado", concluyó el coordinador nacional de Libre.

Tomado de <http://www.rebellion.org>

LATINOAMÉRICA Y CARIBE



CUBA Y HAITÍ, LOS DOS EXTREMOS DE LA DESIGUALDAD SANITARIA LATINOAMERICANA

Un estudio comparativo resalta las diferencias de la salud pública de los países latinoamericanos. Los que logran mejor nota son Cuba, Argentina, Uruguay, Chile y México mientras que en el pelotón de cola están Haití, Guatemala, Bolivia, Venezuela y Honduras.

Uno de los grandes indicadores del bienestar social de los países es el estado, nivel y funcionamiento de sus servicios de salud. Y aunque no son determinantes únicos, son una parte decisiva para medir el tamaño de las desigualdades sanitarias entre países. Con ese espíritu, investigadores de Colombia y Argentina midieron la calidad de los distintos sistemas

de salud de 20 países de Latinoamérica y el Caribe usando 16 indicadores simples, objetivos y estandarizados, como la tasa de mortalidad infantil o la densidad de médicos. El resultado de sus análisis muestra una gran desigualdad entre naciones, con diferencias de hasta 17 años de esperanza de vida media.

El índice utilizado para comparar los distintos parámetros deja un grupo de cabeza liderado por Cuba, seguida por Argentina, Uruguay, Chile y México. El país cuyo sistema sanitario saca peor nota es Haití, seguida en el pelotón de cola por Guatemala, Bolivia, Venezuela y Honduras. "La brecha entre los países latinoamericanos todavía es amplia. Estos hallazgos se convierten en señales de alarma para los estados latinoamericanos", advierten los autores del estudio, publicado en *Gaceta Sanitaria*.^o

Entre los distintos indicadores usados para deducir la nota total de cada país, destaca la esperanza de vida al nacer, que es de 73,7 años de media en toda la región, siendo la menor los 61,5 años de Haití y la mayor los 79 años de Costa Rica y Chile. Esos casi 74 años de esperanza de vida en Latinoamérica son cuatro menos de los que suma EEUU, seis menos que Alemania y ocho menos que España.

En cuanto a la tasa de mortalidad infantil, el promedio en la región es de 20,5 por cada mil bebés nacidos vivos. Pero se trata de un número muy poco representativo debido a la notable heterogeneidad de los números de cada estado: desde las 64 defunciones de niños menores de un año por cada mil en Haití al fallecimiento de cinco niños cubanos. En España son 11 y en EEUU son 14.

Haití, con diferencia el país con la sanidad más precaria, tiene los peores números en muchos otros parámetros, como en mortalidad materna, porcentaje de partos atendidos por personal de salud cualificado, inmunización contra el sarampión, gasto en salud per cápita y población con acceso a agua potable.

Otros países con malos datos concretos son Nicaragua, que presenta la menor proporción de médicos por habitante; Guatemala, con el menor porcentaje de camas hospitalarias; y Bolivia, el país de América Latina que destina menos proporción del PIB al gasto en salud. Venezuela a pesar de figurar como uno de los países con mayor PIB y se encuentra dentro del pelotón de cola “debido fundamentalmente al menor gasto destinado a salud, lo cual puede observarse en los indicadores de recursos sanitarios”, según el estudio.

Ajustes que perjudican seriamente la salud

“Para disminuir las desigualdades en salud”, advierte el estudio, “debería actuarse sobre los factores estructurales que afectan en gran parte las condiciones de vida de las personas. Éstos, también llamados factores contextuales, resultan de la combinación nociva de políticas injustas, situación económica precaria y mala gestión política”. Según se explica en este trabajo, algunos estudios previos han demostrado como ese contexto ha marcado negativamente, o hundido, los indicadores de salud. “En América Latina y el Caribe, durante la década de 1980, el ajuste de las políticas macroeconómicas tuvo un efecto negativo sobre los indicadores sociales, específicamente sobre los relacionados con la situación de salud”, aseguran.

Un estudio publicado en la *Revista Panamericana de Salud Pública* en 2006 describía cómo el adelgazamiento del Estado y la reducción del gasto público en los países de América Latina y el Caribe en la década de 1980 provocó “una ralentización del incremento de la esperanza de vida y del descenso de la mortalidad infantil”. “Fue ahí [en Latinoamérica] donde se sintió de manera más temprana el impacto macrosocial de esos ajustes sobre la salud, lo que demuestra que en solo una década de ajuste, las políticas macroeconómicas pueden causar efectos mensurables sobre los indicadores sociales”, explicaban.

En cualquier caso, a pesar de ese frenazo sufrido hace dos décadas, la situación en la región parece avanzar muy lentamente. Al comparar los resultados obtenidos en el estudio de *Gaceta Sanitaria* (que centra su atención en la evolución entre 2005 y 2010) con un estudio previo similar (entre 2001 y 2005), “puede señalarse que las condiciones de inequidad en la región permanecen en el tiempo”, afirman los autores.

Por último, el estudio reconoce que no se han detenido a comparar las notables desigualdades que se dan dentro de los propios países, poniendo la situación mexicana como ejemplo: “En el caso de México, en la quinta posición tras Cuba, Argentina, Uruguay y Chile, se ha observado que hay grandes desigualdades en los indicadores de salud entre sus estados”, destaca.

La sanidad cubana, hegemónica y fuente de disputas

Cuba siempre ha considerado su sistema sanitario como uno de los puntos fuertes del régimen y es un tema recurrente en las controversias que tratan de confrontar sistemas políticos como si fueran naipes. En el estudio reseñado, que coloca al país caribeño con la mejor nota para su Sanidad, se usaron 16 parámetros distintos. Y las fuentes de las que se recogieron merecen toda la credibilidad: la Organización Mundial de la Salud en diez parámetros, el Banco Mundial en tres y otros tantos de la Comisión Económica para Países de América Latina y el Caribe (CEPAL). “El país mejor posicionado es Cuba, una nación que aunque no tiene el mayor PIB muestra los mejores indicadores de salud y de dotación de recursos sanitarios en la región”, dicen los autores.

Hace tres años, *Science* publicaba un estudio en el que se aplaudían los méritos de la sanidad isleña justo cuando se cumplían cinco décadas de embargo: “[En EEUU] tenemos la oportunidad de aprender de Cuba valiosas lecciones acerca del desarrollo de un sistema de salud verdaderamente universal, que hace hincapié en la atención primaria”, decían sus autores, investigadores de la Universidad de Stanford. El 29 de abril de 2010, exactamente un día antes del *Science*, otra prestigiosa revista, *The Lancet*, publicaba un análisis de cómo había evolucionado la mortalidad entre adultos en el mundo entre 1970 y 2010. Uno de los países peor parados en la comparación era

precisamente Cuba, que era el tercer país del mundo con menor mortalidad en adultos en 1970 y hace tres años había caído hasta el puesto 36°.

Fuente: Javier Salas. - Esmateria

MÉXICO

SOLALINDE ARRANCA AL GOBIERNO DE MÉXICO LA PROMESA DE PROTEGER A LOS EMIGRANTES

Vestido de blanco, con una cruz de madera colgando del pecho, el padre Alejandro Solalinde guarda una agenda negra sobre las rodillas. Abre sus notas y dice: "Mire, esta frase la recuadré bien". Quiere poder esgrimir esas cinco palabras llegado el caso. "No les vamos a fallar". Es la promesa que Manuel Mondragón, comisionado de Seguridad del Gobierno mexicano, le hizo al cura esta semana. "No les vamos a fallar", repite Solalinde.

No fallarle al padre Solalinde significa acabar con los secuestros y las desapariciones que sufren miles de emigrantes cuando atraviesan México camino de Estados Unidos. No fallarle supone evitar que policías federales sean cómplices de esta tragedia de la que no hay cifras ni datos exactos. El padre calcula en unos 10.000 desaparecidos en los últimos tres años. Es solo una estimación. Las pocas certezas han llegado en forma de fosas comunes. 72 cadáveres de emigrantes muertos en Tamaulipas un día, 49 en Nuevo León otro. Se sabe que el camino al norte está salpicado de cuerpos. Muertos sin identificar, de la fosa a la morgue, sin más datos que el número de una ficha policial.

El padre Solalinde vive desde hace años para esos sin nombre. Su actividad al frente del centro de emigrantes Hermanos en el Camino, en Oaxaca le ha costado no pocas enemistades: civiles y eclesiásticas. Varias amenazas de muerte forzaron su salida del país el año pasado. Cuando volvió se le asignaron cuatro agentes para su seguridad. "Hay un cacique en Oaxaca que ha juntado dinero para pagarle a un sicario y matarme. Está apoyado por políticos fuertes del anterior Gobierno local. En la zona en la que está hay mucha droga y armas, muchos intereses. Yo lo descubrí y lo denuncié".

El padre habla de la muerte con la misma tranquilidad con la que habla de Jesús, su "referente". No duda de que un día "alguien" acertará y acabará con su vida. "Eso lo tengo claro. Estoy estorbando intereses muy grandes para la gente ciega que ve en el migrante una mercancía. Yo me estoy metiendo con su mercancía porque para mí son lo más valioso, son Jesús en la persona de los pobres".

Hay un cacique en Oaxaca que ha juntado dinero para pagarle a un sicario y matarme

La fuerza de su solo en apariencia frágil presencia hace años que no pasa inadvertida. Ni siquiera para el poder. La anterior administración, presidida por Felipe Calderón, se sentó con él varias veces pero no se ganó su afecto. "Era un gobierno al que le entraban las cosas por una oreja y le salían por la otra. Era un gobierno simulador, decía que respetaba los derechos humanos de los migrantes y los pisoteaba".

Ahora hay nuevas caras en el poder. Solalinde, que es premio Nacional de Derechos Humanos de México 2012, ha tenido un acercamiento esta semana con el comisionado Mondragón, máximo jefe de la policía en México. "Me pareció sincero, me dio buena espina. Creo que vale la pena darle una oportunidad. Prometió escuchar y actuar". Entonces el padre abre la agenda para no tergiversar las palabras. En los apuntes lleva anotadas las sensaciones que le dio el político: "Es cálido y trata muy bien a su personal", pone en una cuartilla. Y lee: "Dijo que trabajaba con emociones, que entre la policía hay muy buena disposición, pero también hay agentes que no miran al interlocutor y no analizan las cosas. Dijo que tiene como central al ser humano. Habló de cero tolerancia en la corrupción y de priorizar el buen trato a la gente".

La primera prueba al político no tardó demasiado. Al poco de salir de la reunión con Mondragón, al padre le llegó un aviso de uno de los informantes que tiene en todos los Estados. Le advertían del

inminente secuestro de un grupo de 300 inmigrantes en Veracruz. Solalinde quiso probar al Gobierno. “Le dije ‘por favor, ayúdeme’”. En pocos minutos se montó un operativo para proteger a los emigrantes. “Funcionó”, dice sorprendido. Pese a la emoción, el panorama que dibuja de México es desolador: “México está cooptado por la delincuencia. La misma policía que cuida es la que secuestra y extorsiona en connivencia con los cárteles. Los que más secuestran son los Zetas”.

Pese a todo el Solalinde de esta semana es un Solalinde esperanzado que pasa por encima de sus problemas con el obispado. “El obispo de Oaxaca no reconoce que lo que yo hago es un trabajo de Iglesia. Le gustaría meterme en una oficina y que fuera del escritorio al altar. Yo no soy así, hay demasiados desafíos en la Iglesia como para estar encerrado”. Para esos desafíos, el cura parece hoy recobrar la confianza en Roma.

“Este no va a ser un Papa de grandes discursos, de grandes escritos, pero va a hablar como hablan los profetas, por medio de signos, con sus ejemplos. El hecho de atreverse a llamar Francisco en una monarquía como la eclesiástica es recordar que la Iglesia tiene que volver al camino de la pobreza. La misma renuncia de Benedicto XVI nos está hablando de que ese sistema monárquico ya tronó. El Estado del Vaticano debe desaparecer y existir solamente la Santa Sede. ¿Cómo puede ser que un sacerdote se llame monseñor? Es un título medieval que requiere de siervos, pero los siervos ya se acabaron”.

El padre Solalinde habla sin prisa para el diario EL PAÍS, pero a su alrededor se ha ido amontonando gente. Tiene una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Los agentes de la PGR que lo cuidan están ya inquietos. Él no. Aún tiene tiempo de posar para el fotógrafo. Antes de irse responde a una última pregunta. ¿Tiene miedo? El padre sonrío: “No, para nada. De nada ni de nadie. Me gusta mucho la vida, pero soy firme en lo creo”.

Tomado de El País 17/03/2013

NICARAGUA

BM APRUEBA 40 MILLONES DÓLARES PARA NICARAGUA

El Banco Mundial aprobó 40 millones de dólares para dar continuidad a la segunda etapa del Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad (Prodep II), que busca regular los problemas de propiedad de 90 mil familias nicaragüenses y modernizar las instituciones que intervienen en la administración de tierras.

En una nota de prensa emitida por el Banco Mundial, el Procurador General de la República, Hernán Estrada, señala que “la modernización del sistema integral de la propiedad del registro público ha sido uno de los mayores logros del proyecto en su primera etapa, mediante el desarrollo del Sistema Integrado de Información de Catastro y Registro (SIICAR) el cual se seguirá impulsando”.

Según datos brindados por la representante del Banco Mundial en Nicaragua, Camille Nuamah, hasta ahora en Nicaragua se ha catastrado el 18 por ciento del territorio, y se pretende alcanzar el 25.4 por ciento, que equivale a 33 mil kilómetros cuadrados.

Tomado de edicion.digital@laprensa.com.ni

CRISIS NO MERMA LAS REMESAS

Pese a la inestabilidad económica que aqueja a potencias económicas como Estados Unidos y España, las remesas familiares que llegaron desde esos países no se han reducido.

El más reciente informe sobre remesas del Banco Central de Nicaragua (BCN) muestra que el dinero enviado por canales formales desde Estados Unidos incrementó un dos por ciento el año pasado, pese a que su economía sigue sin estabilizarse tras la fuerte recesión iniciada en 2008.

Estados Unidos es el país emisor del 60.1 por ciento (553.4 millones de dólares) del total de remesas que llegan al país, que el año pasado sumaron 1,014.2 millones de dólares.

El monto promedio de la remesa proveniente de la potencia del norte fue de 217.8 dólares.

Por su parte, las remesas procedentes de España aumentaron 11.1 por ciento, hasta llegar a 57.9 millones de dólares. Esto representa el 6.3 por ciento del total de las remesas recibidas.

Dicho crecimiento es importante, tomando en cuenta que la economía española retrocedió un 1.37 por ciento en 2012 y el desempleo alcanzó al 25 por ciento de la Población Económicamente Activa de ese país, que afecta en gran parte a los latinos.

“El monto promedio de la remesa proveniente de la economía española fue 339.4 dólares”, detalla el informe del BCN.

Informa: Gisella Canales Ewest en La Prensa

PUERTO RICO

PUERTO RICO PIDE DESCONTAMINAR ZONAS MILITARES

La Marina de Guerra de EE.UU. ocupó parte de Vieques y Culebra durante cerca de 40 años, hasta 2003, utilizando ambos terrenos para probar armamentos.

El director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, Juan Eugenio Hernández Mayoral, exigió este martes al Pentágono estadounidense la “descontaminación profunda y rápida” de las antiguas zonas de maniobras militares que el Gobierno norteamericano utilizaba en la isla caribeña.

Hernández Mayoral envió una carta al secretario de Defensa, Chuck Hagel, en la que le recordó que es obligación de su Cartera política la limpieza de las islas de Vieques y Culebra, donde Estados Unidos realizó durante décadas ejercicios militares.

El funcionario boricua denunció ante el Pentágono el caso de una niña de siete años que el pasado jueves sufrió quemaduras con un artefacto que contenía fósforo blanco, elemento que en prácticas militares se utiliza como agente incendiario y sirve para crear pantallas de humo.

“A pesar de que los ejercicios con municiones vivas en Culebra terminaron en 1975, muy pocas de estas municiones sin detonar han sido removidas hasta la fecha, lo cual pone en peligro la seguridad de los residentes y turistas”, lee parte de la misiva suscrita por Hernández Mayoral.

En ese sentido, recordó que el Departamento de la Defensa “tiene la obligación de atender esta situación”, por lo que exigió al Pentágono que “cumplan su responsabilidad y remuevan la enorme cantidad de municiones sin detonar y otros contaminantes que dejaron en Culebra, sin retraso adicional”.

Además de una limpieza “profunda” de los terrenos y las aguas afectadas de Culebra, Hernández Mayoral también pidió no descuidar la limpieza ambiental de Vieques, ya que ambas islas están afectadas por la contaminación.

“Igualmente, solicito -al Departamento de la Defensa- no reducir los fondos destinados actualmente para la limpieza ambiental en Vieques, con la excusa de subvencionar el proceso de descontaminación en Culebra”, enfatizó.

El funcionario advirtió que “tras 60 años de ejercicios de intensidad similar y la crisis de salud que permanece como resultado de estos, los ciudadanos de Vieques no deberían sufrir una carga adicional por la inacción de municiones en la vecina isla de Culebra”.

El gobernador puertorriqueño, Alejandro García, Padilla anticipó el pasado fin de semana que exigiría acciones a las autoridades federales, luego del incidente de la niña reportado en la Playa Flamenco, en Culebra.

La Marina de Guerra de Estados Unidos ocupó la mayor parte de Vieques y Culebra durante cerca de 40 años, hasta mayo de 2003, utilizando ambos terrenos como campos de tiro, aunque también alquilaba los lugares a otras naciones para que probaran su armamento.

En 1999, la muerte accidental del guardia civil David Sanés, durante unas maniobras nocturnas de la Marina, suscitaron manifestaciones multitudinarias para exigir la salida de los militares de la isla.

Fuente: APAS

VENEZUELA

ENCUESTAS DAN A MADURO ENTRE 16 Y 22 PUNTOS DE VENTAJA PARA PRESIDENCIALES

Los resultados de los más recientes de sondeos de opinión realizados por diversas encuestadoras del país dan como ganador al candidato de la Revolución, Nicolás Maduro, con una brecha de entre 16% y 22% por encima del aspirante de derecha, Henrique Capriles Radonski.

Instituto Venezolano de Análisis de Datos (Ivad), indica que en las próximas elecciones presidenciales 53,8% de los venezolanos votarían por el candidato de la Revolución, Nicolás Maduro, quien se ubica con una brecha de 22,2% por encima del aspirante de la derecha, Henrique Capriles, quien sólo tuvo el 31,6% del respaldo en esa encuesta.

El estudio, realizado entre el 12 y 18 de marzo de 2013 por la encuestadora registrada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), consultó quién es el mejor candidato para resolver los problemas del país: 54% afirmó que es Maduro, mientras 32,3% dijo que era Capriles y 13,7% se abstuvo de opinar. La brecha a favor del candidato socialista es de 21,7%.

El muestreo, también presentó datos sobre la gestión del Gabinete de Gobierno: 58,5% de los encuestados la consideró como positiva.

Maduro también es visto por el 54,3% de los venezolanos como el candidato que garantiza mayor estabilidad política en el país; Capriles obtuvo 31,5% de respaldo y 14,3% no respondió. La brecha a favor del candidato revolucionario es de 22,8%.

Independientemente de su preferencia de votos, 64,7% de los venezolanos están seguros de que triunfará Nicolás Maduro, 22% considera que ganará Capriles, y 13,1% de los encuestados no respondieron. En este particular, la brecha a favor del socialista es de 42,4%.

Respecto a la militancia partidista, el estudio del Ivad reveló que el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psvu) cuenta con un 48,3% de militancia y simpatía partidista.

El apoyo o simpatía a los partidos de derecha se divide de la siguiente manera: Primero Justicia, 6,7%; Acción Democrática, 4,4%; Un Nuevo Tiempo, 3,6%; PPT, 1,4%; Copei, 1,2%; Voluntad Popular, 1,1%. Otros partidos sumados, 3,9%; ninguno 27,9%; no sabe-no responde, 1,6%.

Datanálisis La encuesta realizada entre el 12 y 13 de marzo de 2013 por Datanálisis, empresa aliada de la oposición venezolana, señala que el candidato socialista Nicolás Maduro tiene un respaldo de 49,2%, mientras que el aspirante de la derecha venezolana cuenta con 34,8%.

Una ventaja de 14,4% mantiene Maduro sobre Capriles Radonski, quien perdió en las elecciones del pasado 7 de octubre por más de diez puntos ante Hugo Chávez.

AVN

VENDEN EL CANAL DE TELEVISIÓN QUE LLEVAN AÑOS DICIENDO QUE CERRABA CHÁVEZ

Hace cuatro años leíamos este titular en la prensa española: Chávez ordena a la Justicia el cierre de Globovisión (ABC, 29-5-2009). Y dos años antes también leíamos “Chávez amenaza al único canal opositor tras la clausura de RCTV” (El País, 30-5-2007), también en referencia al canal Globovisión.

Pues bien, ahora nos enteramos que Guillermo Zuloaga, el presidente y accionista mayoritario de Globovisión, ha decidido vender la cadena al empresario venezolano Juan Domingo Cordero una vez que pasen las elecciones presidenciales del 14 de abril. El canal que llevan años diciendo que lo cierra Chávez, se vende pero cuando Chávez ya no está. Ni siquiera puede acusar a ningún presidente prochavista de obligar su venta porque lo está anunciando para después de las elecciones.

En la carta de anuncio de la noticia por parte de Zuloaga muestra que su cadena no tenía ningún interés en informar, ni entretener, ni en nada parecido para lo que las empresas poseen una licencia de emisión. Incluso que tuvo como objetivo un cambio de gobierno por encima de los intereses comerciales de los accionistas. En esa carta afirma : “ El año pasado, tomé la decisión de hacer todo lo que estuviera en nuestro poder, a riesgo del capital de los accionistas y conscientes de las implicaciones que esta actitud podría traer, para lograr que la oposición ganara las elecciones de octubre. Era la oportunidad, como venezolanos, para recuperar nuestro país. En Globovisión lo hicimos extraordinariamente bien y casi lo logramos, pero la oposición perdió. Eso nos puso en una situación muy precaria como canal y como empresa ” .

Aunque señala sentirse acosado por el gobierno venezolano, reconoce que “somos inviable (sic) económicamente, porque nuestros ingresos ya no cubren nuestras necesidades de caja”. O sea, que es su sacrosanto mercado el que les cierra, no el Hugo Chávez que ya no preside Venezuela, como llevan años diciendo los medios de todo el mundo.

Pascual Serrano - Rebelión